



RESOLUCIÓN No.

No 0663

27 AGO. 2007

Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

LA SUBSECRETARIA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas en los artículos 36 del Decreto Nacional 564 de 2006 y 36, literal k del Decreto Distrital 550 de 2006, y

CONSIDERANDO

I.- Que a través de la radicación No 06-5-3234 del 6 de diciembre de 2006, el señor **AQUILINO ARIAS ARIAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.163.673, solicitó ante el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva y Demolición Total para el predio ubicado en la Carrera 68 C Bis No. 4-05 de la Urbanización Nueva Marsella de la Localidad de Kennedy de esta ciudad.

II.- Que de conformidad con lo solicitado, el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C., el 15 de junio de 2007 expidió la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962.

III.- Que el doctor **LUIS ARMANDO PALOMÁ BERNAL**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 19.383.745 de Bogotá, en ejercicio de las facultades conferidas en Resolución No. 133 del 14 de abril de 2005 de la Personería Distrital de Bogotá, D.C., mediante escrito radicado en la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá, D.C. mediante el número 2698 del 29 de junio de 2007, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007, con el fin de que ésta sea revocada, planteando en síntesis, lo siguiente:

1.- La Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962 expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007, presenta deficiencias respecto a la identificación plena del bien y de su titular. Esto, por cuanto el inmueble no se individualiza con el número de matrícula asignado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y para el caso del el titular:

"(...) en el acto administrativo se registra el nombre de AQUILINO ARIAS ARIAS, sin indicar la clase y número del documento que lo identifica.

Omisión que está llamada a causar eventuales perjuicios al predio que se autoriza intervenir urbanísticamente porque la dirección que se registre en el acto administrativo



27 AGO. 2007

Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

de licenciamiento con el transcurso del tiempo, puede resultar identificando otro inmueble, como en efecto sucede con los predios que son objeto de actualización en su dirección.

(...)

La falta de identificación plena o identificación incompleta, impide a las autoridades que tienen el encargo de verificar el cumplimiento de la norma urbana, cuando de verificar el uso del suelo de trata, cumplir con esta labor de manera expedita porque la sola la dirección bien (Sic), el nombre del titular sin el número del documento de identidad y la ausencia del número de la matrícula inmobiliaria, implica la necesidad de recurrir a otros medios probatorios para lograr la identidad plena del bien y su propietario. Estas carencias no contribuyen en nada al control urbano y por el contrario, imponen unas cargas que no tienen porque soportar las alcaldías locales”.

2.- “Otro aspecto que repercute en la legalidad del trámite se ubica en el cumplimiento de la exigencia prevista en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 564 de 2006 y tiene que ver con la idoneidad del medio probatorio aportado para acreditar el pago del impuesto predial correspondiente a los años 2002, 2005 y 2006. Sea lo primero señalar que la obligación fiscal correspondiente al año 2002 es la más atacable, resulta que en el mejor de los casos el reporte de pagos deja ver que en principio no se cumplió, el 5 de julio se informa sobre un NO PAGO y el 7 de noviembre aparece un pago. Lo menos que puede presumirse es que no hubo un pago oportuno y que por lo mismo debió en el mes de noviembre de 2002 haberse cancelado una parte correspondiente a intereses por mora, siempre y cuando no se hubiera configurado una sanción por extemporaneidad, situación que sólo es posible decantar con el documento (Sic) donde conste la liquidación del pago. Lo otro y en el mismo orden de ideas se concreta en la necesidad de llevar al expediente la prueba idónea que acredita el cumplimiento de la obligación tributaria, la cual debe ser satisfecha con la presentación de una fotocopia de la declaración privada del impuesto predial. Documentos de los años 2002, 2005 y 2006 que no se anexaron a la solicitud y que por lo mismo enfrenta el fenómeno de la radicación incompleta”.

3.- “Otro reparo que se formula en el proceso de expedición tiene que ver con la competencia que la ley le otorga al curador urbano para expedir licencias de construcción, así como el relacionado con su prórroga. Aspecto digno de consideración, en cuanto a formalidades se refiere, se registra la ausencia del formalismo de elaborar una resolución debidamente motivada cada vez que se autorice una prórroga de términos, conforme lo establece el artículo 28 del Decreto 564 de 2006, obligación que deliberadamente se omite y se agrava.

La situación se agrava, cuando se traslada el análisis a la competencia que la ley radicó en cabeza de los particulares - curadores, para el ejercicio de la función delegada de autorizar licencias de construcción. Inexplicablemente dentro del expediente se encuentran una serie de actuaciones por parte de personas naturales que no se encuentran revestidas de ninguna (Sic) facultad legal para impulsar el trámite, (...) Esta conducta en el ordenamiento jurídico Colombiano configura la Usurpación de función pública, y por tratarse de una decisión que está reservada en la ley al Curador Urbano, debe tomarse por inexistente y por lo mismo, debe en vía administrativa y de manera oficiosa declararse (Sic) la nulidad de lo actuado.



Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

(...)

A la luz de las normas que gobiernan la figura del curador urbano, no puede quedar duda alguna, sobre la competencia exclusiva y excluyente del curador urbano, como único particular autorizado por la ley para recibir, tramitar y expedir licencias de construcción.

4.- "Otro aspecto objeto de revisión tiene que ver con la garantía de información y publicidad del trámite a los vecinos colindantes. Se desconoce a uno de los dos vecinos colindantes (Sic), solo se da cuenta de una comunicación enviada al predio localizado en la Carrea (Sic) 68 C Bis No. 4-11/13, dejando de comunicar y notificar al predio que linda con el costado posterior".

IV.- Que el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C., mediante la Resolución No. RES 07-5-0350 del 26 de julio de 2007, decidió no acceder a las pretensiones formuladas en el recurso de apelación interpuesto por el Doctor **LUIS ARMANDO PALOMÁ BERNAL** contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962 del 15 de junio de 2007 y, remitió el expediente a la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación con el fin de que se surta el recurso subsidiario de apelación.

Como sustento de la decisión antes citada, el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C., presentó el siguiente:

"ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.

Se procede a analizar los motivos de inconformidad expresados en el recurso de reposición, teniendo en cuenta el orden en el que fueron sintetizados:

1. Diligenciamiento del formulario de solicitud y de licencia

En cuanto a las manifestaciones del Delegado de la Personería en este sentido, es necesario hacer las siguientes precisiones:

En primera instancia, es importante recalcar que la relación de vecinos colindantes establecida en el numeral 7 del artículo 18 del Decreto 564 de 2006 está referida expresamente a la dirección de los predios lindantes sin que se genere la obligación de identificarlos de manera distinta o adicional a esta.

En lo que atañe a la relación de solo un vecino colindante y la falta de citación y notificación al otro, si bien es cierto que en la hoja No. 1 del formulario 6798 se relacionó como vecino colindante solamente una dirección, con la solicitud se aportó la manzana catastral 004501 correspondiente al barrio Protecho de la localidad de Kennedy, en donde se puede establecer que el predio objeto de la petición cuenta con 2 vecinos colindantes: lateralmente el predio identificado con la nomenclatura urbana KR 68 C BIS 4 11/13, tal como se indicó en el citado formulario y posteriormente con un inmueble señalado como INT 4.

No obstante lo anterior, y con la finalidad de realizar las comunicaciones a vecinos y terceros señalada en los Decretos 564 y 4397 de 2006 se verificó en el sistema SINU



Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

POT la dirección del colindante posterior, encontrando que corresponde a la CL 5 68 C 27 de esta ciudad.

Visto el expediente contentivo de la solicitud, encontramos que mediante oficios de comunicación DJ-CV-32342 y DJ-CV-32343 de fecha 25 de enero de 2007 se comunicó sobre el inicio de la actuación a los propietarios, usufructuarios, arrendatarios, tenedores o poseedores de los predios ubicados en la KR 68 C BIS 4 11/13 y CL 5 68 C 27 de esta ciudad, los cuales fueron devueltos. Adicionalmente, el 11 de diciembre de 2006 se realizó la publicación de la solicitud en el Diario El Nuevo Siglo.

En consecuencia, la falta de indicación de uno de los vecinos colindantes en el formulario de solicitud obedeció a la información deficiente que del mismo se tenía, situación esta que no afecta el trámite puesto que se realizaron las actuaciones tendientes a establecer la dirección del mismo y hacer las comunicaciones correspondientes tal como se desprende claramente de la revisión del expediente, quedando de esta manera desvirtuada la afirmación del Agente del Ministerio Público en tal sentido.

En cuanto a la firma del formulario por parte de una persona distinta al titular, vale la pena destacar que con la solicitud se aportó el poder especial otorgado por el señor Aquilino Arias al señor William Barrera Ricaurte, dentro del cual se le confiere al apoderado la facultad de firmar el formulario. El poder tiene constancia de presentación personal y reconocimiento de huella del señor Aquilino Arias efectuada ante la Notaría 61 del círculo de Bogotá.

De acuerdo con la documentación que reposa en el expediente, es claro que la firma consignada en el literal a numeral 5 del formulario de solicitud corresponde a la del mandatario William Barrera Ricaurte, según el poder aportado, actuación realizada en uso de las facultades conferidas en el mandato, por lo cual no existe razón para afirmar que se configura una falsedad cuando el apoderado firma el formulario de solicitud, puesto que el titular de la licencia lo facultó explícitamente para tal fin.

En lo que tiene que ver con la indicación del número de matrícula inmobiliaria del predio objeto de la solicitud y el número de documento de identidad del titular de la licencia, es preciso señalar que al formato único simplificado de licencia de construcción que contiene el Acto Administrativo se le adhiere por la otra cara la hoja No 1 del formulario único de solicitud de licencia de construcción y en la cual el titular consigna entre muchos otros tales datos, que pueden ser corroborados con la documentación aportada.

Lo anterior encuentra fundamento en el inciso 2 del artículo 2 del Decreto 349 de 2003, norma según la cual la hoja No.1 del formulario de solicitud hace parte de la licencia de construcción, razón por la cual queda en estos términos resuelta la inquietud planteada por el recurrente.

Sin perjuicio de lo expuesto, es pertinente señalar que no es posible invocar la ocurrencia de un perjuicio al inmueble o generación de cargas a las autoridades de control cuando hay cambio de nomenclatura y en el texto de la licencia se identifica el predio solo con su dirección, puesto que tales variaciones pueden verificarse con los certificados de nomenclatura expedidos por Catastro Distrital, así como otros datos que permiten la identificación plena del inmueble.



No 0663

27 AGO. 2007

Continuación de la Resolución No. _____

Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

2. Acreditación del pago del impuesto predial para el inmueble objeto de la solicitud y determinación de la mora en el pago del mismo

Anota el Delegado de la Personería que la radicación no está completa puesto que con la solicitud no se aportó el impuesto predial de los años 2002, 2005 y 2006, aportando una consulta de pagos en la cual no es claro si para el año 2002 hubo pago o no, pero si que hubo mora en el mismo.

En cuanto a la constancia de pago del impuesto predial del inmueble objeto de la solicitud, vale la pena mencionar que la ley 527 de 1999 define como mensaje de datos a la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax, estableciendo el reconocimiento Jurídico de los mismos, al disponer que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos.

Igualmente establece la ley 527 de 1999 que cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta, disponiendo que Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, y que en toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original.

En el presente caso y de acuerdo con la documentación que reposa en el expediente, en el mismo se encuentra además de la copia de declaraciones de pago del impuesto predial para los años 2003, 2004 y 2007, un repote pagos del impuesto predial del inmueble objeto de la solicitud obtenido a través de la página de Internet de la Dirección Distrital de Impuestos en donde se relacionan desde el año 2000 hasta el año 2006 los pagos de dicho tributo indicando en el mismo número de transacción, entidad recaudadora, fecha de presentación y el indicador de pago.

Con dicha documentación se acredita válidamente el pago del impuesto predial de los últimos 5 años del predio objeto de la solicitud, sin que sea factible interpretar que cuando la disposición se refiere al documento que acredite el pago, se esté refiriendo únicamente a la copia del recibo de pago, lo que implicaría una limitación a la libertad probatoria en este campo.

Lo anterior encuentra fundamento en el hecho que si la Secretaría Distrital de Hacienda no expide paz y salvos o certificaciones sobre el pago del impuesto predial, quien por algún motivo no cuente con las copias de las liquidaciones privadas de ese impuesto, no tendría ninguna manera de acreditar el pago del mismo durante los últimos 5 años distinta a la relación de pagos mencionada.



Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

Aunado a lo anterior, mediante oficio OF 2007EE60868 del 1 de abril del presente, suscrito por el Subdirector de Impuestos a la Propiedad de la Secretaría de Hacienda Distrital, en respuesta a una consulta elevada por el Curador Urbano No. 1 respecto a la constancia de pago de las declaraciones tributarias, se expresó lo siguiente:

"...el documento que la administración tributaria expide como constancia de la presentación y pago de las declaraciones tributarias que es de carácter informativo es la relación de pagos que cumple la misma función del paz y salvo.

Dicha relación de pago contiene la información suministrada por el mismo declarante en las respectivas declaraciones y que se obtiene de nuestro sistema de información tributaria (SIT II), que en esencia es una base de datos".

En consecuencia, las correspondientes copias de las declaraciones privadas con constancia de pago no son el único documento para demostrar el pago del impuesto predial sino que también lo pueden ser el repote (Sic) de declaraciones y pagos del impuesto predial o el estado de cuenta que emite la dirección Distrital de impuestos. Por ello se considera que estos documentos pueden aceptarse como prueba para cumplir el requisito exigido en el artículo 18, numeral 5, del decreto 564 de 2006, más aún si la entidad encargada del recaudo y fiscalización de los impuestos le atribuye a esta constancia el mismo efecto que el paz y salvo, ello sumado a las disposiciones de la Ley 527 de 1999.

Finalmente, respecto a si hubo o no mora en el pago del impuesto predial para el año 2002, en el reporte de pagos presentado con la solicitud es claro que el 7 de noviembre de 2002 se realizó el pago del mismo en el Banco Ganadero con constancia de la transacción No. 13135010047227.

Si el pago anterior fue efectuado en tiempo o no y si esto acarreó algún tipo de sanción pecuniaria el interesado, es una circunstancia ajena al ejercicio de las funciones asignadas por la ley al Curador Urbano que se circunscriben única y exclusivamente a la materia urbanística, quien no realiza gestión fiscal alguna sobre el impuesto predial.

No es dable atribuirle al Curador Urbano competencia alguna en el plano de la "verificación" del contenido del impuesto predial por la sencilla razón de que el legislador no le atribuyó ejercicio alguno de dicha competencia, y al no hacerlo, no puede el intérprete superar ese límite deduciendo o atribuyendo competencias no estipuladas en la norma.

Las funciones de determinación, discusión, recaudo y fiscalización de los tributos son ejercidas por la Administración Distrital, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 161 y 162 del Decreto-Ley 1421 de 1993, los artículos 5 y 59 del Decreto Distrital 352 de 2002. Por su lado, el Estatuto Tributario Nacional (Decreto Extraordinario 624 de 1989), en su artículo 684 señala cuales son las facultades de fiscalización e investigación de que goza la administración tributaria, que son extensibles a la administración tributaria Distrital.



No 0663

27 AGO. 2007

Continuación de la Resolución No. _____

Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

Por otra parte, el Decreto Distrital 0946 de 2001, de la Secretaría de Hacienda, y la Resolución 461 de 2002, dirigida a los entes recaudadores indican qué deben controlar, cómo lo deben hacer y cómo se reporta a la Secretaría de Hacienda dicha información. En conclusión, es a la Administración Distrital de Impuestos de la Secretaría de Hacienda, a la que le compete ejercer las funciones de verificación y control sobre el impuesto predial, y no a los curadores urbanos.

3. Prórroga del término para cumplir las observaciones, formalidad y actuación del grupo interdisciplinario en este aspecto.

Respecto a la ampliación del término para cumplir con las observaciones realizadas a la solicitud, es del caso señalar que el artículo 27 del Decreto 564 de 2006 no establece ningún tipo de formalidad para la concesión de la prórroga, lo que de facto implicaría que basta con la solicitud que de ella se haga y si no existe pronunciamiento desfavorable se entiende que se concedió, es decir, que si realizada la solicitud, es factible su otorgamiento pero la autoridad no se pronunció, opera tácitamente la concesión del plazo adicional.

En estas condiciones, no es cierto que para conceder prórroga al plazo de cumplimiento de observaciones se debió elaborar una resolución debidamente motivada, puesto que este procedimiento no se encuentra establecido en la norma señalada para el caso en comento, a diferencia del establecido en el artículo 28 ibídem; que no puede aplicarse en este evento, porque los supuestos de hecho son distintos y no opera dicha formalidad por analogía.

En cuanto a las actuaciones adelantadas por los profesionales y auxiliares que se desempeñan en la oficina del Curador Urbano es pertinente establecer que en virtud de la naturaleza de la función que ejerce el Curador Urbano la misma ley ha establecido que dicho particular debe contar un equipo profesional que le prestará la ayuda como mínimo en los aspectos jurídicos, arquitectónicos y de la ingeniería civil especializada en estructuras que se desprenden de el (Sic) ejercicio de sus funciones, así mismo la norma le impone el deber de contar con una infraestructura administrativa para poder adelantar debidamente sus funciones.

En este orden de ideas es apenas natural que dentro de las actividades inherentes al estudio y trámite (Sic) de licencias urbanísticas intervengan e interactúen dichos profesionales con los titulares de las solicitudes al igual que con el personal encargado de labores administrativas y de apoyo, sin que ello configure en manera alguna usurpación de funciones públicas en la medida que ninguna de estas personas es quien expide y firma los diferentes actos administrativos mediante los cuales se ponen fin a las actuaciones adelantadas, actuación que es exclusiva del Curador Urbano y en la cual se materializa el ejercicio de su función.

Es desatinado pretender que sea el Curador Urbano el encargado de adelantar cada una y todas las actuaciones que se requieren para el estudio y trámite (Sic) de una solicitud y que le dan impulso a la misma, en la medida que son actos de trámite para los cuales la norma precisamente ha establecido la existencia de un personal interdisciplinario y de apoyo a la labor del Curador Urbano, pues de lo contrario la actividad de la administración



Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

resultaría lenta e ineficaz, igual criterio se aplica en este sentido a todas las demás autoridades administrativas en el desempeño de sus funciones.

En conclusión, el Curador Urbano es autónomo en el manejo de su organización y puede delegar en sus funcionarios las tareas que considere pertinentes, salvo la expedición de los actos administrativos por medio de los cuales se resuelvan las solicitudes de licencia radicadas en su oficina, situación que no se presenta en este caso, puesto que la comunicación respecto a la operancia de la prórroga del término para que el solicitante cumpla las observaciones no puede calificarse como un acto administrativo que ponga fin a la actuación, en los términos del Código Contencioso Administrativo, y constituye un formalismo, puesto que como ya se dijo, dicha prórroga perfectamente puede operar de manera tácita, motivo por el cual no resulta procedente revocar la decisión adoptada.

En consecuencia, y por las consideraciones expuestas en el análisis precedente, se concluye que las razones expresadas por el recurrente no conllevan a revocar la Licencia de Construcción No LC 07-5-0962 expedida el 15 de junio de 2007 por el Curador Urbano No 5 de Bogotá D.C, motivo por el cual esta oficina considera improcedente acceder a dicha solicitud”.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Corresponde a este Despacho decidir el recurso subsidiario de apelación interpuesto por el doctor **LUIS ARMANDO PALOMÁ BERNAL**, contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962 del 15 de junio de 2007, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C., a lo cual se procede, previas las siguientes consideraciones:

OPORTUNIDAD

Revisado el expediente se observa que el 22 de junio de 2007, la doctora **CONSUELO CARANTON TORRES**, como Delegada de la Personería de Bogotá, se notificó personalmente del contenido de la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962 del 15 de junio de 2007, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. y, el 29 de junio de 2007 el doctor **LUIS ARMANDO PALOMÁ BERNAL** radicó ante la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá, D.C. los recursos de reposición y subsidiario de apelación, es decir, que los mismos fueron presentados dentro de los términos previstos en el inciso 1° del artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, que dice:

“ART. 51.—De los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o la publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo”.

PROCEDENCIA.



Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

El recurso de apelación, es procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto Nacional 564 de 2006, que dice:

"Artículo 36. Recursos en la vía gubernativa. Contra los actos que resuelvan las solicitudes de licencias procederán los recursos de reposición y apelación:

1. El de reposición, ante el curador urbano o la autoridad municipal o distrital que lo expidió, para que lo aclare, modifique o revoque.

2. El de apelación, ante la oficina de planeación o en su defecto ante el alcalde municipal, para que lo aclare, modifique o revoque. El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición.

Parágrafo. Los recursos de reposición y apelación deberán presentarse en los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo".

En relación con los argumentos del recurrente, tenemos lo siguiente:

A.- En primera instancia, conviene señalar que el señor Agente del Ministerio Público no hace reparo alguno en relación con los aspectos de orden técnico, sino que sus planteamientos se refieren a cuestiones relacionadas con asuntos de tipo formal o de trámite, como son:

1. La no identificación plena del bien objeto de la licencia recurrida y de su titular.
2. El no cumplimiento cabal de lo dispuesto el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 564 de 2006, por la falta de idoneidad del medio probatorio aportado para acreditar el pago del impuesto predial correspondiente a los años 2002, 2005 y 2006.
3. La falta de competencia, "(...) para expedir licencias de construcción, así como el relacionado con su prórroga", ya que, "(...) dentro del expediente obran una serie de actuaciones por parte de personas naturales que no se encuentran revestidas de ninguna (Sic) facultad legal para impulsar el trámite, (...)".
4. La falta "(...) de información y publicidad del trámite a los vecinos colindantes. Se desconoce a uno de los dos vecinos colidantes (Sic), solo se da cuenta de una comunicación enviada al predio localizado en la Carrea (Sic) 68 C Bis No. 4-11/13, dejando de comunicar y notificar al predio que linda con el costado posterior".

B.- En relación con los puntos anteriores, el Despacho analiza lo siguiente:

Punto 1.

Respecto del tema del formulario único de solicitud de licencia de construcción y del formato único de licencia de construcción se precisa hacer el siguiente análisis:



Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

Por Decreto Distrital 349 de 2003 el Alcalde Mayor de la Ciudad Capital adoptó el formulario único de solicitud de licencia de construcción y el formato único de licencia de construcción.

En el inciso segundo artículo 2° del Decreto en mención se determinó: *"El formato único de licencia de construcción (página 1-A anexa), junto con la página 1 del formulario único de solicitud de licencia (documento de soporte del acto administrativo), es el instrumento a través del cual el curador urbano expide la licencia de construcción, que una vez perfeccionado constituye el acto administrativo o licencia de construcción. Dicho documento debe contener la información básica sobre el proyecto de construcción aprobado por el respectivo curador urbano.*

Posteriormente el Decreto Nacional 1600 de 2005 dispuso: **"Artículo 17. Documentos.** Toda solicitud de licencia urbanística deberá acompañarse de los siguientes documentos:

1. Formulario único nacional de solicitud de la licencia debidamente diligenciado por el solicitante.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptará mediante resolución el formulario único nacional de solicitud de licencia".

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con fundamento en la competencia conferida en el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 216 de 2003, expidió la Resolución No. 0984 del 21 de julio de 2005, por medio de la cual *"se adopta el formulario único nacional para la solicitud de licencias de parcelación, urbanización, subdivisión y construcción y para el reconocimiento de edificaciones y la guía para su diligenciamiento".*

Con la expedición del Decreto Nacional 564 de 2006 se reiteró entre los documentos que deben acompañar toda solicitud de licencia urbanística el siguiente: **"Artículo 18. (...) 2. El formulario único nacional para la solicitud de licencias adoptado mediante la Resolución 0984 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la adicione, modifique o sustituya, debidamente diligenciado por el solicitante".**

De lo anterior se infiere:

- 1.- Que para la fecha en que fue solicitada la licencia de construcción que nos ocupa el formulario único de solicitud era (y sigue siendo) el adoptado por el Ministerio a través de la Resolución 0984 del 21 de julio de 2005.
- 2.- Que con la expedición de la Resolución 0984 de 2005 el formulario único de solicitud de licencia de obligatorio diligenciamiento es el adoptado por la Resolución en mención.
- 3.- Que la Resolución 0984 de 2005 no se ocupó de adoptar el formato único de licencia de construcción, el cual sí lo fue por el Decreto Distrital 349 de 2003, quedando en consecuencia vigente, pero sin perjuicio de lo establecido actualmente en el Decreto Nacional 564 de 2006 en su artículo 31 que dispone:



Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

"Artículo 31. Contenido de la licencia. La licencia contendrá:

1. Número secuencial de la licencia y su fecha de expedición.
2. Tipo de licencia y modalidad.
3. Vigencia.
4. Nombre e identificación del titular de la licencia, al igual que del urbanizador o del constructor responsable.
5. Datos del predio:
 - a) Folio de matrícula inmobiliaria del predio o del de mayor extensión del que este forme parte;
 - b) Dirección o ubicación del predio con plano de localización.
6. Descripción de las características básicas del proyecto aprobado, identificando cuando menos: uso, área del lote, área construida, número de pisos, número de unidades privadas aprobadas, estacionamientos, índices de ocupación y de construcción.
7. Planos impresos aprobados por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias".

4.- Que tanto los datos contemplados en el formato único de licencia de construcción de que trata el Decreto Distrital 349 de 2003, como los exigidos en el artículo 31 del Decreto 564 de 2006, son coincidentes. Además debe tenerse en cuenta que conforme lo indica el inciso segundo del artículo 2° del Decreto Distrital citado *"la pagina 1 del formulario único de solicitud de licencia (documento de soporte del acto administrativo), es el instrumento a través del cual el curador urbano expide la licencia de construcción, que una vez perfeccionado constituye el acto administrativo o licencia de construcción"*. Al respecto se aclara que toda autoridad en desarrollo del principio de celeridad consagrado en el artículo 3° del Código Contencioso Administrativo, tiene la facultad de utilizar formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible. En tal sentido la circunstancia de no haberse adoptado en la Resolución 0984 de 2005, un formato único para la expedición de las licencias de construcción no suprimió el ya aprobado en el referido Decreto Distrital, el que sigue siendo válido en tanto se ajusta a las exigencias establecidas en el transcrito artículo 31 ibídem.

5.- Que en Bogotá a propósito de los formatos del Decreto 349 de 2003, la página No. 2 del formulario único de solicitud contiene una exigencia de información adicional a la contemplada en la Resolución No. 0984 de 2005, lo que tampoco puede apreciarse como una infracción a esta última normativa, de acuerdo con la expresado en el numeral que antecede y con fundamento en el artículo 3° del C.C.A.

En lo concerniente *"a una firma que presuntamente no es la del titular, sino la del mandatario WILLIAM BARRERA, lo que en principio puede configurar una falsedad, a la luz de lo normado en el numeral 2 del artículo 18 del Decreto 564 de 2006 que exige que el formulario único debe encontrarse debidamente diligenciado por el solicitante"*, se torna indispensable hacer claridad en el sentido que a continuación se expone:

El artículo 18 del Decreto 564 de 2006, al clasificar los documentos que deben acompañarse con toda solicitud de licencia urbanística, entre otros, relaciona: *"2. El formulario único nacional para la solicitud*



Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

de licencias adoptado mediante la Resolución 0984 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la adicione, modifique o sustituya, debidamente diligenciado por el solicitante" y "4. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado".

La Resolución 0984 de 2005 por la cual se adopta el formulario Único Nacional para la solicitud de licencia, también aprueba la guía para el diligenciamiento del formulario; formatos e instructivos que permiten dilucidar el tema de la persona que debe diligenciar el formulario, esto es, la que debe hacerse responsable de la autorización que demanda del Curador, así como de los documentos y estudios que con ella aportan. En efecto el numeral 5 del Formulario denominado TITULARES Y PROFESIONALES RESPONSABLES contiene dos literales **a. TITULAR (ES) DE LA LICENCIA - C.C. O NIT - FIRMA (S)** y **b. PROFESIONALES RESPONSABLES. URBANIZADOR O CONTRATISTA, ARQUITECTO PROYECTISTA, INGENIERO CIVIL CALCULISTA, INGENIERO CIVIL O GEOTECNISTA, DISEÑADOR DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**, con sus respectivas FIRMAS y No. MATRÍCULA PROFESIONAL.

En la guía para el diligenciamiento en el literal a) numeral 5 se indica: ***"Titulares de la Licencia: Indicar el nombre, cédula de ciudadanía o NIT y firma del titular o los titulares de la licencia y del propietario, con excepción de los poseedores. El propietario corresponde a aquel que aparezca como tal en el certificado de matrícula inmobiliaria".***

Examinada la normativa transcrita se infiere que quien debe firmar el formulario es el titular, es decir, quien ostente los derechos a que se refiere el artículo 16 del Decreto 564 de 2006, o en su defecto, el profesional a quien se haya otorgado poder en debida forma, documento que como se anotó, también debe allegarse al trámite con la solicitud.

Ahora urge precisar a quien se puede otorgar poder para actuar en nombre del solicitante, para lo cual encontramos oportuno iniciar con el artículo 5 de la Ley 962 de 2005 que reza: ***"Artículo 5°. Notificación. Cualquier persona natural o jurídica que requiera notificarse de un acto administrativo, podrá delegar en cualquier persona el acto de notificación, mediante poder, el cual no requerirá presentación personal, el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación y toda manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá, de pleno derecho, por no realizada. Las demás actuaciones deberán efectuarse en la forma en que se encuentre regulado el derecho de postulación en el correspondiente trámite administrativo. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la notificación del reconocimiento de un derecho con cargo a recursos públicos, de naturaleza pública o de seguridad social".*** (negrillas fuera de texto).

Al respecto, las normas que regulan el procedimiento administrativo para la expedición de licencias no se ocupan en específico del derecho de postulación, salvo en lo relativo a la exigencia del poder debidamente otorgado cuando se actúe mediante apoderado. Por tanto se impone acudir a lo preceptuado en el artículo 35 del Decreto ley 196 de 1971, que reza: ***"Salvo los casos expresamente determinados en la ley, no se requiere ser abogado para actuar ante las autoridades administrativas; pero si se constituye mandatario, éste deberá ser abogado inscrito"*** (negrillas fuera de texto).



Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

Así lo normado, y en desarrollo del artículo 23 de la Constitución Política y las previsiones que desarrollan el derecho de petición en la primera parte del C.C.A, para actuar ante las autoridades administrativas no se requiere ser abogado, salvo cuando se constituye mandatario a través de poder debidamente otorgado.

Sobre este particular el tratadista Miguel González Rodríguez, en su obra *"Derecho Procesal Administrativo"* expresa: *"...las actuaciones administrativas se pueden adelantar directamente por los interesados, aun sin tener el título de abogado. Desde luego que si se constituye un apoderado especial o uno general para que en nombre del interesado adelante una o varias actuaciones administrativas, aquél deberá ser abogado autorizado para ejercer la profesión"*.

No obstante se aclara, que lo expresado no es óbice para que el titular de la licencia autorice expresamente y por escrito a los ingenieros y arquitectos para adelantar los demás trámites que no tengan por objeto la disposición o ejercicio de un derecho, como a manera de ejemplo sí revisten esta condición la solicitud de licencia y la interposición de los recursos de la vía gubernativa, actuación esta última que de manera expresa está reservada en el C.C.A. a los abogados en ejercicio, cuando el interesado no actúa directamente (artículo 51). Ello en consideración a la activa participación que tales profesionales tienen en el curso de la actuación, al tenor de las responsabilidades que adquieren en relación con los diseños y la información contenida en los planos y documentos técnicos, conforme a los artículos 19 numeral 2 y 22 numerales 1 y 2 del Decreto 564 de 2006.

En oportunidades anteriores este Despacho ya se había pronunciado al desatar diferentes recursos interpuestos con el mismo argumento, sobre la posibilidad que tienen los particulares de acudir a los profesionales diferentes a los abogados, para tramitar y gestionar diferentes actuaciones dentro del procedimiento que no impliquen la disposición o ejercicio de un derecho, precisamente dada su idoneidad profesional en la presentación de proyectos que respondan a las exigencias de la normativa urbanística.

Conforme a lo indicado no es válido admitir que la autorización que conceden quienes pueden ser titulares de las licencias comprenda también la de firmar el Formulario Único de Solicitud, porque esa atribución es del titular o de su apoderado, quien debe ostentar el ius postulandi

En el asunto que se estudia, el impugnante encuentra que "presuntamente" la firma estampada en el espacio correspondiente a la del titular es la del mandatario WILLIAM BARRERA, a quien efectivamente el señor AQUILINO ARIAS revistió de la facultad para firmar el formulario como se observa a folio 14 del expediente. Se impone entonces examinar si esta situación, que constituye un vicio de procedimiento, tiene la aptitud suficiente para invalidar la actuación que culminó con la expedición de la Licencia N° LC. 07-5-0962 del 15 de junio de 2007.

Sobre el tema resulta de importancia traer a colación la definición que del principio de eficacia se encuentra en el artículo 3° del C.C.A. en virtud del cual: *"se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo a petición del interesado"*.



Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

Conviene entonces examinar, cuáles son las nulidades resultantes de vicios del procedimiento, ya que por principio general del derecho las causales que las generan deben estar señaladas en la ley, y por vía de cosa juzgada constitucional, también la consagrada en el artículo 29 de la Constitución, según el cual *“es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”* (Sentencia C-491 de 2 de noviembre de 1995). Así, encontramos que en esa materia la primera parte del Código Contencioso Administrativo no contiene un catálogo de ellas y en la parte segunda relativa al control jurisdiccional de la actividad administrativa, se hace expresa remisión a las señaladas en los artículos 140 y 141 del Código de Procedimiento Civil. De ahí que resulte además pertinente y por disposición del artículo 267 del C.C.A., acudir a aquél ordenamiento en esa materia.

Revisadas las causales de nulidad que se enlistan en el artículo 140 del C. de P. C. se infiere que el reproche formulado por el Agente del Ministerio Público se tipifica en el numeral 7 de la norma en cita, esto es, *“Cuando es indebida la representación de las partes...”*, lo que para el asunto que ahora nos interesa se traduce en la carencia del ius postulandi del señor WILLIAM BARRERA. Sin embargo y siguiendo con la aplicación del artículo 267 del C.C.A., también se encuentra procedente acudir a lo normado en el artículo 144 del mismo Código, el cual enumera de manera taxativa los eventos en los que la nulidad se considera saneada; entre ellos el numeral 4 que reza: *“Cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa”*, previsión que valga la pena recordarlo guarda consonancia con el principio de eficacia al cual se ha hecho mención en precedencia. Adicionalmente debe tomarse en consideración que la indebida representación de las partes es susceptible de sanearse ya que al tenor del inciso *in fine* del mismo artículo, no son objeto de saneamiento las nulidades de que tratan los numerales 3 y 4 del artículo 140, esto es, *“Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia”* y *“Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde”*. En consecuencia no es procedente el reproche del impugnante aquí analizado.

Punto 2.

En cuanto a los señalamientos del libelista relacionados con el incumplimiento de lo expuesto en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 564 de 2006¹, norma que señala la obligación de aportar junto con la solicitud de una licencia urbanística, el documento que acredite el pago del impuesto predial de los últimos cinco años, debe entenderse que la citada regla no hace referencia a un determinado y específico documento, sino al idóneo y demostrativo de la cancelación de *“la declaración privada con*

¹ Artículo 18. Documentos. Toda solicitud de licencia urbanística deberá acompañarse de los siguientes documentos:

(...)

5. Copia del documento que acredite el pago o declaración privada con pago del impuesto predial de los últimos cinco años en relación con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, donde figure la nomenclatura alfanumérica o identificación del predio.

En los casos donde exista un acuerdo de pago, se requerirá constancia de la secretaría de Hacienda o quien haga sus veces, estableciendo que el interesado se encuentra dando cumplimiento al mismo.

(...)”



Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

pago del impuesto predial de los últimos cinco años en relación con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud".

Dentro del expediente a folio 11, obra el escrito de fecha 14 de noviembre de 2006, tomado de la Dirección Distrital de Impuestos vía internet, donde se hace un reporte detallado del pago del impuesto predial unificado del predio identificado con el CHIP: AAA0040TXJH -, cuyo número coincide con el señalado en los formularios de declaración sugerida que se aportan y que pertenecen al predio de la KR 68C BIS 4-05 -, correspondiente a los años 2000 a 2006, indicando en el citado documento el número de autoadhesivo, la entidad recaudadora y la fecha de presentación de la declaración. En la Parte inferior del texto en cuestión, se dice que sin perjuicio del indicador de pago, el documento, "(...) es el resultado fiel de la información que reposa en la Secretaría de Hacienda presentada por el contribuyente (...)". Adicionalmente, dentro del expediente se encuentran diferentes copias del formulario para declaración sugerida de los años 2003, 2004, 2005 y 2006, donde se observa que la fecha y número de auto adhesivo que aparecen allí, corresponden exactamente con la fecha y número señalados en el documento descargado vía internet. (Folios 12, 13, 37, 52,53 y 54)

Por otra parte, para constatar la información contenida en el documento aportado -, en el que, según se advirtió anteriormente, se observa el pago del impuesto predial para el inmueble objeto de estudio, el número del *sticker* y la fecha en que se presentó -, se puede ingresar a la página web de la Secretaría de Hacienda Distrital, de conformidad con lo señalado en los artículos 1 num. 4, 2 y 3 de la Ley 962 de 2005² (Ley Antitrámites).

² **"Artículo 1°. Objeto y principios rectores.** La presente ley tiene por objeto facilitar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los artículos 83, 84 , 209 y 333 de la Carta Política. En tal virtud, serán de obligatoria observancia los siguientes principios como rectores de la política de racionalización, estandarización y automatización de trámites, a fin de evitar exigencias injustificadas a los administrados:

(...)

4. Fortalecimiento tecnológico. Con el fin de articular la actuación de la Administración Pública y de disminuir los tiempos y costos de realización de los trámites por parte de los administrados, se incentivará el uso de medios tecnológicos integrados, para lo cual el Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones, orientará el apoyo técnico requerido por las entidades y organismos de la Administración Pública.

Artículo 2°. Ambito de aplicación. Esta ley se aplicará a los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública, de las empresas de servicios públicos domiciliarios de cualquier orden y naturaleza, y de los particulares que desempeñen función administrativa. Se exceptúan el procedimiento disciplinario y fiscal que adelantan la Procuraduría y Contraloría respectivamente.

Para efectos de esta ley, se entiende por "Administración Pública", la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998.

Artículo 3°. Las personas, en sus relaciones con la administración pública, tienen los siguientes derechos los cuales ejercerán directamente y sin apoderado:

A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a las peticiones, actuaciones, solicitudes o quejas que se propongan realizar, así como a llevarlas a cabo.

A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copias, a su costa, de documentos contenidos en ellos.

A abstenerse de presentar documentos no exigidos por las normas legales aplicables a los procedimientos de que trate la gestión.

Al acceso a los registros y archivos de la Administración Pública en los términos previstos por la Constitución y las leyes.



Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

La finalidad de esta Ley es la de facilitar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, *"de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta Política. En tal virtud, serán de obligatoria observancia los siguientes principios como rectores de la política de racionalización, estandarización y automatización de trámites, a fin de evitar exigencias injustificadas a los administrados (...)"*³

Debe precisarse que la norma que el recurrente estima infringida, sólo hace exigencia del documento que permita establecer si el interesado en la expedición de la licencia ha realizado *"el pago o declaración privada con pago del impuesto predial de los últimos cinco años en relación con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud"*, más no si ese valor corresponde exactamente al que debió cancelar, ya que ello implicaría que la autoridad encargada de la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales, efectuara previamente a la solicitud de licencia, la revisión del valor declarado y pagado, al cual no se refiere la norma en comento y, cuya verificación no corresponde al Curador Urbano en el ejercicio de sus funciones.

El pago total del impuesto generado para la respectiva vigencia fiscal, o de los intereses de mora, según el caso, es una situación que solo puede determinarse una vez se haya realizado el trámite interno por parte la Dirección Distrital de Impuestos de la Secretaría Distrital de Hacienda, tal como lo dispone el artículo 28 literal e del Decreto Distrital 545 de 2006, procedimiento que no es requisito para solicitar una licencia urbanística. Si se le exigiera al interesado, como paso previo a la solicitud y expedición de la licencia, demostrar que el pago se ha efectuado de manera completa y, sin ninguna deficiencia, error o mora, se estaría actuando en contra de la disposición constitucional que establece que *"Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio"*. (Artículo 84).

Finalmente y frente al concepto emitido por la Secretaría Distrital de Hacienda radicado 2007EE175211 del 25 de julio de 2007 dirigido al Personero Delegado para el Medio Ambiente y el Desarrollo Urbano, se observa que al concluir que el *"reporte de declaraciones y pagos,"* no constituye recibo de pago por la simple razón de que los datos en él consignados a pesar de tratarse de datos oficiales, *"1. Proviene de la información suministrada por el contribuyente"*, está reconociendo que tal reporte es tomado del contenido del *"Formulario para declaración sugerida del Impuesto predial unificado"* y que a juicio del impugnante es el que debe allegarse en cumplimiento del numeral 5 del artículo 18 del Decreto 564 de 2006.

Así las cosas, no existiendo prueba en contrario, que desmienta la información contenida en los documentos atrás mencionados, el Despacho estima que con ellos se está cumpliendo la exigencia de la norma citada por el recurrente, por lo que no tienen cabida los argumentos esgrimidos.

A ser tratadas con respeto por las autoridades y servidores públicos, los cuales deben facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

A exigir el cumplimiento de las responsabilidades de la Administración Pública y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.

A cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes."

³ Artículo 1° de la Ley 962 de 2005



Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

Punto 3.

En relación con el cuestionamiento que se plantea frente a la competencia de los empleados de la Curaduría para impulsar o adelantar algunos trámites:

Dispone el artículo 100 del Decreto Nacional 564 de 2006 que los curadores urbanos *"deberán contar con el grupo interdisciplinario que apoyará su labor, como mínimo en materia jurídica, arquitectónica y de la ingeniería civil especializada en estructuras"*, norma que es clara en asignar al recurso humano que se exige al Curador Urbano para participar en el concurso de méritos que tiene por finalidad su designación, una **tarea o gestión de apoyo** que no puede interpretarse como suplétoria de las funciones que le asigna la ley en su condición de particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanización, construcción y subdivisión de predios, a petición de los interesados, conforme así expresamente lo establece el artículo 65 ibídem, salvo cuando uno de los miembros del equipo entra a suplirlo en los casos de faltas temporales.

Conforme a las referencias normativas expresadas y también al contenido de la previsión consagrada en el artículo 67 del Decreto 564 de 2006, quien responde disciplinaria, fiscal, civil y penalmente por los daños y perjuicios que se causen a los usuarios, a los terceros y a la administración pública en ejercicio de la función pública de verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, a través del otorgamiento de licencias, es el curador urbano y no los miembros del equipo de apoyo o interdisciplinario. De ahí que no sólo esté obligado a suscribir las licencias que se otorguen, sino también los actos que se expidan en el curso del procedimiento y que comporten decisiones o manifestaciones de la voluntad orientadas a la expedición de la respectiva autorización o licencia.

Resulta entonces pertinente precisar, que las normas de procedimiento contenidas en la Sección II del citado Decreto 564 de 2006, de manera expresa se refieren al *"curador urbano o la autoridad municipal o distrital encargada del estudio, trámite y expedición de la licencia"*, (artículo 24) cuando se trata de citar a los vecinos colindantes del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud para que se hagan parte y puedan hacer valer sus derechos. También y con la misma expresión *"curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias"*, cuando se alude al levantamiento de un acta de observaciones y correcciones en la que se informe al solicitante sobre las actualizaciones, correcciones o aclaraciones que debe realizar al proyecto y a los documentos (artículo 27).

De tal manera que, al ser el Curador Urbano el titular de la función pública de expedir las licencias urbanísticas, es a él y no a los miembros del grupo de apoyo a quien corresponde expedir y suscribir tanto los actos que expresamente así lo disponga el Decreto, como aquellos que comportan una decisión con incidencia en el acto definitivo. A manera enunciativa, los que autorizan la ampliación del término para dar respuesta al acta de observaciones y correcciones, los que aceptan el desistimiento de la solicitud y los que ordenan el archivo del expediente por la ocurrencia del desistimiento tácito.

De lo expuesto se debe inferir, que lo dispuesto en el Decreto 564 de 2006 no puede ser interpretado como una simple consagración normativa sin finalidad específica, ya que la sola determinación legal de hacer responsable al Curador Urbano disciplinaria, fiscal, civil y penalmente por los daños y perjuicios que se causen a los usuarios, a los terceros y a la administración pública, implica que en el ejercicio de



Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

su gestión deba decidir con conocimiento de causa no sólo sobre la licencia que le ha sido requerida por los interesados, sino también respecto de los actos que permiten adoptarla.

En el caso que nos ocupa, y que el Agente del Ministerio Público califica de usurpación de función pública que en vía administrativa, y que de manera oficiosa da lugar a la declaración de la nulidad de lo actuado, en razón a que la autorización de la prórroga del término para responder el acta de observaciones no fue suscrita por el Curador Urbano, debe analizarse si esa decisión que no fue adoptada por el particular titular de la función pública y que constituye un vicio del procedimiento tiene la aptitud suficiente para invalidar la actuación que culminó con la expedición de la Licencia N° LC. 07-5-0962 del 15 de junio de 2007.

Nuevamente es oportuno estarse a lo ya expresado sobre el principio de eficacia contenido en el artículo 3° del C.C.A. y a las nulidades resultantes de vicios del procedimiento, conforme a lo explicado en el punto 1 que antecede.

Es así como revisadas las causales de nulidad que se enumeran en el artículo 140 del C. de P. C., se infiere que el reproche formulado por el Agente del Ministerio Público se tipifica en el numeral 2 de la norma en cita, esto es, *"Cuando el juez carece de competencia"*, lo que para el asunto que ahora nos interesa se traduce en la falta de competencia de quien expidió la autorización de prórroga para contestar el acta de observaciones. Pero al tenor del artículo 267 del C.C.A., es también pertinente aplicar lo dispuesto en el artículo 144 del C. de P.C., que como ya se dijo estipula de manera taxativa los eventos en los que la nulidad se considera saneada, entre ellos el numeral 4 que reza: *"Cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa"*, contenido concordante con el principio de eficacia definido en el artículo 3° del C.C.A.

No obstante, lo anterior no implica que este Despacho comparta la posición del Curador Urbano No. 5 en la Resolución No. RES 07-5-0350 del 26 de julio de 2007, en la que asume que como el artículo 27 del Decreto 564 de 2006 no establece ninguna formalidad para conceder la prórroga, basta con la simple solicitud del interesado para entenderla autorizada, inclusive tácitamente, cuando no exista pronunciamiento desfavorable. La razón para no hacer nuestra la apreciación expuesta, radica precisamente en la obligación que tiene el Curador de sopesar la procedencia o no de conferir el plazo adicional al inicial y no dejarla al arbitrio de los miembros del grupo de apoyo, pues tal determinación eventualmente puede ser decisiva en la concesión o no de la licencia, por ejemplo cuando ha operado un cambio normativo y la solicitud no fue objeto de radicación en debida forma. Ahora, tampoco le es dado al Curador inferir que el solo silencio frente a la solicitud de la prórroga implica su otorgamiento tácito, puesto que para que esa figura opere debe estar consagrada en la ley con indicación de los casos y del sentido en que se debe entender como presunta la decisión por la falta de respuesta de la administración. Es más, entender que el silencio del Curador equivale a decisión positiva contraviene lo normado en el artículo 41 del Código Contencioso Administrativo, en el cual se regula la figura del silencio positivo.

Punto 4.



No 0663

27 AGO. 2007

Continuación de la Resolución No. _____

Por la cual se decide un recurso de apelación interpuesto contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

En cuanto a la falta de comunicación y notificación al vecino del predio que linda por el costado posterior, el Despacho advierte que dentro del expediente, a folio 18 se encuentra la comunicación CV-32343 del 25 de enero de 2007, dirigida a los propietarios, usufructuarios, arrendatarios, tenedores o poseedores del predio ubicado en la CL 5 68 C 27 Interior 4 de esta ciudad. Así mismo, a folio 19 aparece la guía 180881733 de fecha 30 de enero de 2007, con la que se envía la comunicación aquí citada, la cual fue devuelta por Servientrega, según se informa por parte del Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. en la resolución mediante la cual se decide el recurso de reposición.

En el mismo sentido, en el folio 15 aparece la copia de la publicación realizada el 11 de diciembre de 2006 en el Diario El Nuevo Siglo, a través de la cual se informa que con la radicación No. 06-5-3234, se solicitó ante la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá, D.C., licencia de construcción en la modalidad de Obra Nueva y Demolición Total para el predio de la Carrera 68 C Bis No. 4-05.

Consecuente con lo antes señalado, el Despacho encuentra que en el caso que nos ocupa, se adelantaron las actuaciones legalmente previstas, con el fin de comunicar a los vecinos colindantes posteriores y, en consecuencia no procede el argumento del Agente del Ministerio Público.

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- No acceder a las pretensiones formuladas en el recurso subsidiario de apelación interpuesto por el doctor **LUIS ARMANDO PALOMÁ BERNAL**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 19.383.745 de Bogotá, contra la Licencia de Construcción N° LC. 07-5-0962 expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá, D.C. el 15 de junio de 2007.

ARTÍCULO 2.- Notificar el presente acto al doctor **LUIS ARMANDO PALOMÁ BERNAL** y al titular de la licencia, señor **AQUILINO ARIAS ARIAS** advirtiéndoles que contra éste no procede ningún recurso en la vía gubernativa.

27 AGO. 2007

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C. a los


FABIOLA RAMOS BERMÚDEZ
Subsecretaria Jurídica

Proyectó: Juan de J. Vega F.

Revisó: Jorge Enrique Ramírez Hernández 